

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N° 089

Proyecto discutido y aprobado en Sala virtual

Medellín, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en el proceso ordinario laboral interpuesto por la señora **MARTA LUCIA GÓNZALEZ YEPES** contra **PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La demandante solicitó que se declare la ineficacia de su afiliación al RAIS a través de **Protección S.A.**, y en consecuencia, se ordenó a esa administradora que traslade los aportes efectuados y sus correspondientes rendimientos a **Colpensiones**, y a esta última administradora, a tenerla como su afiliada para efectos pensionales (pdf dda).

Hechos

La actora fue afiliada al **ISS** hoy **Colpensiones** en **mayo de 1988**, trasladándose a **Protección S.A.** en **mayo de 1995**, sin que antes de su vinculación a la administradora privada se le suministrará una información clara y fehaciente con respecto a las consecuencias legales y económicas que tendría su cambio de régimen pensional (fls.pdf dda).

Realizó solicitud de traslado ante Protección el pasado 22 de agosto de 2018 y 13 de septiembre dicha entidad respondió de forma desfavorable, y ante Colpensiones el 06 de junio de dicho año, entidad que resolvió en el mismo sentido.

Contestación Colpensiones

Colpensiones a través de apoderada, indicó que es cierta la afiliación inicial de la parte actora en el ISS, los demás hechos no le constan. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones. Inexistencia la ineficacia del traslado, devolución de aportes debidamente indexados, buena fe, prescripción, compensación, e imposibilidad de condena en costas (fls.47 pdf respuesta dda).

Contestación Protección S.A.

Protección S.A., por intermedio de apoderada, manifestó que la actora se afilió de forma voluntaria y debidamente informada a esa administradora de pensiones, en particular se le indicó que en el RAIS el afiliado es quien resuelve su futuro pensional a través de la planeación y el ahorro. Además, en el 2011 fue llamada nuevamente y se asesoró sobre las condiciones de los dos regímenes.

Se opuso a la prosperidad de las excepciones y propuso como excepciones: Inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de recurso, inexistencia de la obligación de devolver comisiones y reaseguros previsionales.

Sentencia de Primera Instancia

La Juez Quince Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **24 de julio de 2020**, Absolvió de todas las pretensiones de la demanda a Protección y Colpensiones y condenó en costas a la parte actora.

Fundamentó su decisión en que no era procedente declarar la ineficacia a la actora, toda vez que el Fondo Privado la había dado una reasesoria en el año 2011 y allí le había explicado todas ventajas y desventajas de cada régimen y en especial sobre su situación. Y que no era procedente referirse a las demás pretensiones.

Esta decisión no fue compartida con la apoderada de la parte actora, quien interpuso el recurso de apelación.

Recurso de apelación parte demandante.

La apoderada de la parte actora en su recurso manifestó que no comparte la decisión de la Juez de instancia en cuanto negó las pretensiones de la demanda, por el hecho de la reasesoria que realizó la parte actora en el año 2011.

Lo anterior lo sustenta en que la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en reiterar que la reaseria no subsana el hecho de no haberse dado una asesoría clara completa y precisa al momento del traslado, lo que para el caso no ocurrió, ni al principio de la vinculación y menos en la asesoría del año 2011, pues tampoco se explicó a la actora con claridad las ventajas y desventajas de su traslado.

Solicita en consecuencia que se revoque la decisión de primera instancia y se ordene el traslado de todos los conceptos de la cuenta de ahorro individual de la demandante, junto con los frutos e intereses.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado consagrado en el artículo 15 del Decreto 806 de 1990, la apoderada de la parte demandante por intermedio de apoderada presentó alegatos, en los que solicitó se revoque la sentencia y se declare la Ineficacia de la afiliación en favor de la demandante:

Manifestó la apoderada que en el caso de la actora existió una falta de información y que la misma no fue convalidada al momento de recibir una reasesoria como lo asumió la Juez de primera instancia, criterio del cual se aparta, toda vez que la Corte Suprema de Justicia, ha sido enfática al indicar que en materia de seguridad social existe un verdadero e ineludible deber de obtener un consentimiento informado, ya que dicho procedimiento garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o un servicio, que el usuario comprenda las condiciones, riesgos y consecuencia de su afiliación al régimen, es decir, que previo al acto el afiliado recibió toda la información clara, cierta, comprensible y oportuna, que así las cosas, el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente para dar por demostrado el deber de información precisado, tal como lo ha manifestado la Corte Suprema en la Sentencia SL-16892019 (65791) de 2019. Situación que se puede extraer también en el caso de la reasesoria donde tampoco se brindó información veraz y oportuna que le permitiera a la demandante tomar una decisión informada, cosa que quedó también clara en la audiencia de primera instancia, que si bien existe un formato de reasesoria pensional de fecha 2011-08-25, no se evidencia que hubiese suministrado a la actora la información completa y comprensible, orientándola sobre la consecuencia de la elección del régimen pensional, con la ilustración suficiente de las diferentes alternativas, con sus beneficios y

desventajas; es decir, que la información suministrada por la convocada a juicio al momento de la afiliación y de la reasesoria no se acompasa a los términos expuestos por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, situación que fuese ratificada en declaración realizada por mi representada la señora MARTHA GONZALEZ, donde indicó que de haber sabido y de haberle explicado en su momento por el asesor de protección de que su mesada pensional iba a ser tan bajita, ella se hubiera trasladado a COLPENSIONES, que solo le indicaban que iba a tener más rendimientos con este fondo y que era mejor.

Para el caso hay suficiente evidencia de que efectivamente no hubo una buena información completa, clara y veraz, con respecto a los beneficios y los no beneficios de un régimen u otro, y la manifestación de voluntad y selección del régimen plasmado en el formulario de afiliación y el de reasesoria, no constituye en manera alguna, medio probatorio que permita inferir que a las accionantes se les proporcionó la información adecuada y veraz en los términos referidos precedentemente, como quiera que, tal como se dejó suficientemente explicado, así mismo resalta la apoderada que dicho formulario de reasesoria no fue diligenciado por la señora GONZALEZ sino por el asesor, donde ella solo plasmó su firma, en un formulario donde en el espacio de observaciones estaba en blanco y que luego en la contestación de la demanda ya se encontraba diligenciado, ya que de haber sabido que su mesada pensional era más alta en COLPENSIONES y que estaba a tiempo de trasladarse lo hubiera hecho.

Manifiesta que la “Reasesoría” Pensional, obrante a folios 84 del expediente, no surte ningún efecto, porque aparte de que alude a un acto que no nació a la vida jurídica; no sustituye la manifestación formal que los artículos 13, literal b), de la Ley 100 de 1993 y 11 del Decreto 692 de 1994 exigen para el diligenciamiento válido de la selección de régimen pensional y su vinculación a éste, y no brinda por si sola la comprensión cierta, suficiente y comprensible respecto a la vinculación en los dos regímenes pensionales ni sobre los beneficios e inconvenientes del traslado del Régimen de Prima Media al de Ahorro Individual.

Por último, manifestó la apoderada que el hecho de que actualmente la demandante haya indicado algún tinte de conocimiento respecto de estos regímenes pensionales, no quiere decir esto, que este conocimiento sea de vieja data o suministrado por las AFP, por el contrario, es producto de asesorías e investigaciones posteriores, que desataron en la decisión de iniciar este proceso al ya contar con una información veraz. En razón a lo anterior solicitó muy respetuosamente, se Revoque el fallo de Primera Instancia y en consecuencia se disponga a declarar como prosperas las pretensiones incoadas en el escrito

de demanda, con todas las consecuencias legales que ello conlleva para cada una de las partes demandadas.

Problema Jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta instancia de conformidad con el grado jurisdiccional de consulta en favor de **Colpensiones**, serán: (i) Determinar si el acto jurídico que generó el traslado de régimen del demandante a la **AFP Protección S.A.** resulta o no eficaz, (ii) Establecer que conceptos está obligada a devolver **Protección S.A.** a **Colpensiones** y (iii) Revisar si operó la prescripción de la acción y si el hecho de haberse realizado una reaserción subsana la falta de información ocurrida al momento del traslado.

CONSIDERACIONES

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas que obran en el expediente:

1. La señora **Marta Lucia González** fue afiliada al **ISS** hoy **Colpensiones** en el mes de **marzo de 1978**, efectuando cotizaciones esta administradora hasta junio de 1995.
2. El día **31 de julio de 1995**, la demandante suscribió formulario de vinculación a la **AFP Protección S.A.**, (pdf dda).
3. El día **25 de agosto 2011**, la señora **González Yepes** recibió reaserción de parte de **Protección S.A.** (0pdf respuesta dda).

Efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento:

El precedente jurisprudencial en materia de traslado de régimen pensional

La Corte Suprema de Justicia ha elaborado un nutrido precedente en materia de la obligación de información de los fondos de pensiones, siendo sus sentencias fundantes la 31314 y 31989 del 9 de septiembre de 2008, a las que ha seguido una copiosa producción dentro de las que se destacan las sentencias SL 1688-2019, SL4360-2019 y SL4426-2019.

En las últimas providencias citadas, el Alto Tribunal fijó unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el vínculo, estableciendo en lo temporal los siguientes momentos: (i) desde la fundación de las AFP, (ii) desde la expedición de la

Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010 y (iii) a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

En el caso sometido a estudio, el traslado al RAIS a través de la **AFP Protección S.A.**, se efectuó el **31 de julio de 1995**, lo que se corresponde con el primer momento, ciclo para el cual según lo expresado en la sentencia SL-1452-2019 la obligación de la administradora privada demandada era la de brindar una información necesaria y transparente.

Los conceptos de información necesaria y transparente son definidos en la providencia citada de la siguiente forma:

Información necesaria: consistente en la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, lo que implica un comparativo entre las vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado.

Transparencia: La AFP a través de su promotor debe comunicar a su potencial afiliado en un lenguaje claro, simple y comprensible, los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios.

El anterior deber trae en lo procesal una carga que recae en la administradora de pensiones privada, y es la de demostrar que suministró al posible afiliado una información calificada, en la que se expliquen los beneficios y desventajas del cambio de régimen, para solo a partir de este conocimiento concluir que se garantizó su derecho al ejercicio de una libre selección de régimen pensional.

Sobre la **carga de la prueba** es importante la remisión a la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada -la de que no recibió información- y es el fondo a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, aspecto en el que por demás está en una mejor posición de ilustrar por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado.

En lo que respecta al caso de autos, **Protección S.A.** indicó que su afiliada fue asesorada de forma clara, cierta y veraz acerca de los efectos y consecuencias

del traslado de régimen, sin que en este aspecto se allegará prueba de que al momento de la vinculación se actuó bajo esas reglas de conducta; debiendo recordarse que el formulario de vinculación no demuestra nada de las condiciones en que se captó a la afiliado, siendo el formato de traslado un requisito formal del traslado que como indicara la Corte en la sentencia SL4426-2019 acredita la existencia de un consentimiento sin vicios, pero no informado.

En esa línea queda por establecer si la posterior reasesoría suministrada el **25 de agosto de 2011**, en la que se le indicó a la actora que sería más beneficioso desde lo económico trasladarse al RAIS puede sanear su conducta inicial o convalidar la afiliación, entendiendo por lo tanto que la omisión al momento de la afiliación se tiene por subsanada con la información presentada con posterioridad.

Para este fin es necesario recordar que el precedente emanado de la Corte Suprema de Justicia ha abordado el tema del traslado de régimen pensional desde la institución de la **ineficacia**, institución jurídica que conforme con la doctrina especializada¹ puede darse en dos sentidos, amplio y estricto.

El primero consistente en *“la ineptitud, la falta de idoneidad, la carencia de efectividad de un acto o negocio jurídico para desencadenar efectos negociales...”*, y que se deriva de los siguientes factores:

1. Los sujetos que participaron en los tratos prenegociales desatendieron alguna o algunas de las prescriptivas del segmento del orden jurídico imperativo que gobierna el ejercicio de la autonomía privada.
2. Que en ejercicio de la autonomía privada los tratantes introdujeron condiciones de hecho o condiciones de derecho en contenido del acto negocial que no se cumplieron.
3. Situaciones tales como el ajuste del acto estando viciada la voluntad de alguno de los sujetos negociales, la ilicitud de los motivos inductivos al perfeccionamiento del negocio, la celebración del negocio con fines a fraude a los acreedores y el cierre del acto en detrimento sensible de los intereses patrimoniales de alguna de las partes.

Entre tanto, en su segunda acepción, la del *stricto sensu*, la ineficacia implica que el negocio jurídico exista y sea válido, pero existen factores externos a su estructura que le privan de producir efectos.

¹ Baquero, E. R. (2008). *La ineficacia en el negocio jurídico*. Alianza Editorial. Págs. 21-23.

Esta figura o mejor su ocurrencia es explicada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-345 de 2017, donde se expresa:

...la ineficacia en sentido estricto se presenta en aquellos casos en los cuales la ley, por razones de diferente naturaleza, ha previsto que el acto no debe producir efectos de ninguna naturaleza sin que sea necesaria la existencia de una declaración judicial en ese sentido

A partir de esta manifestación se encuentra que uno de los factores externos a los que se alude, se encuentran en la ley y conforme con lo explicado por la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL-4360 de 2019 son aplicables a modo de sanción cuando se atente contra la libertad de selección de los afiliados del régimen pensional, lo que en el caso de las administradoras de pensiones se verifica cuando teniendo un deber legal de información omitieron suministrar la misma en condiciones suficiencia y objetividad.

En la providencia que se viene de citar la Corte hace una diferencia entre las figuras de inexistencia, nulidad absoluta y relativa e ineficacia en sus dos sentidos, para concluir que el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 consagra la figura de la ineficacia en sentido estricto, pues en ella se sanciona: *“...cualquier atentado o transgresión contra el derecho del trabajador a la afiliación libre y voluntaria a un régimen pensional... con la ineficacia del acto.”*

Una vez dilucidado lo anterior, advierte la Sala que, al tratarse de una trasgresión de la ley, no puede ser saneada o convalidada, con posteriores reasesorias, como lo consideró la Juez, por cuando no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos, siendo importante en este aspecto recordar lo enseñado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 1688 de 2019:

Es claro entonces que la referencia de la AFP accionada a que el demandante no demostró vicios de error, fuerza o dolo es inaplicable, al igual que su alegación de saneamiento del acto, puesto que, a diferencia de algunas nulidades que pueden ser depuradas por el paso del tiempo o la ratificación de la parte interesada, la ineficacia es insaneable en cuanto no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos.

En línea con lo anterior, no encuentra razón esta Sala para desestimar la pretensión de ineficacia de la demandante, por lo que, en consecuencia, **revocará** la decisión de primera instancia y en su lugar declarará ineficaz la afiliación de la señora **Marta Lucia González Yepes** al RAIS a través de **Protección S.A.** en los términos de inciso 1º del artículo 271 de la Ley 100 de

1993, por lo que se entenderá afiliada sin solución de continuidad al RPM administrado en la actualidad por **Colpensiones**.

Implicaciones de la declaratoria de ineficacia para las administradoras de pensiones

La Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia 31989 del 9 de septiembre de 2008 advirtió sobre la necesidad que existe cuando se declare lo que para aquel momento se denominó *nulidad* de que la administradora de pensiones que la generó devuelva todo lo recibido para lo cual se debe aplicar el artículo 1746 del Código Civil que trata sobre las restituciones mutuas en los eventos de nulidad relativa y el artículo 963 del Código de Comercio, que establece que el aumento del valor del bien quedara en cabeza del vendedor (en este caso del afiliado) cuando la restitución se deba a incumplimiento del comprador (AFP RAIS).

Esta teoría fue desarrollada por más de 10 años por la jurisprudencia especializada laboral, que, en sentencia SL-4360 de 2019, explicó que al no existir un camino demarcado por el legislador cuando se declare la ineficacia en *stricto sensu*, la institución de inmediata referencia es la nulidad que consagra unas consecuencias idénticas, consistentes en la vuelta al *statu quo ante*.

Para la vuelta a ese estado inicial del negocio regulada en el artículo 1746 del CC, es necesario además tener en cuenta que la seguridad social se rige por unos principios que le son propios y que deben ser aplicados por el juez con el fin de que la vuelta a ese statu quo se dé a través de soluciones que resarzan y compensen los perjuicios ocasionados al afiliado, los que conforme con la jurisprudencia se resumen en los siguientes conceptos:

- 1. Capital ahorrado:** Este concepto constituye el sustento financiero del pago de la prestación y conforme con lo dispuesto en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993 debe ser trasladado cuando exista movilidad del RAIS al RPM².
- 2. Rendimientos:** En igual sentido que el concepto anterior, soportan el pago de la pensión y se trasladan conforme a lo enseñado por el canon 113 ídem, destacando con respecto a estos como lo enseñara la Corte desde la sentencia 31989 de 2008, que su devolución se sustenta en que el mayor valor de la cosa aprovecha al vendedor cuando la restitución se debe al incumplimiento del comprador³.

² Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019.

³ Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019.

3. **Los gastos de administración:** De conformidad con el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, el 3% de la cotización de los afiliados se destinará se a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, concepto que al declararse la ineficacia de la afiliación y la ficción de que las cosas vuelvan al estado inicial como si esta no se hubiera producido, debe ser devuelto a la administradora del RPM debidamente indexado, puesto que no está obligada la entidad que no tuvo nada que ver con la infracción a la ley a soportar sus efectos privándosele de recibir los mismos, máxime cuando el mismo artículo 20 también consagra este concepto en su favor⁴.
4. **Los aportes al fondo de garantía de pensión mínima:** el pago de estos aportes propio del RAIS y consagrado en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 no encuentra un equivalente en el RPM, motivo por el cual esta Sala ha sostenido que al declararse la ineficacia los dineros aportados por el afiliado a este fondo deben ser devueltos al RPM bajo los lineamientos del artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016.

Esta orden en particular cuenta con reciente sustento jurisprudencial en la sentencia SL 2877-2020 en la cual la Corte Suprema de Justicia la encontró procedente, máxime cuando estos recursos los manejan las administradoras de pensiones privadas en una subcuenta separada con el fin de financiar aquellas prestaciones.

A partir de lo explicado, encuentra la Sala que se debe **condenar** a **Protección S.A.** a trasladar a **Colpensiones** los siguientes conceptos: (i) El capital ahorrado en la cuenta individual de la señora **Marta Lucia González Yepes**, (ii) los rendimientos generados, (iii) los dineros cobrados por concepto de gastos de administración con cargo a su propio patrimonio y debidamente indexados a la fecha del traslado, concepto que incluye: los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, y (iv) el aporte correspondiente al fondo de la garantía de pensión mínima.

Como consecuencia de lo anterior, **ordenar** a **Colpensiones** recibir estos recursos acreditándolos en términos de semanas cotizadas a nombre de su afiliada **Marta Lucia González Yepes**.

De la excepción de prescripción

⁴ En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL4360-2019, CSJ-SL 2611-2020 y CSJ SL 2877-2020.

En lo que tiene que ver con la prescripción, encuentra la Sala que esta excepción no está llamada a prosperar, puesto que, la ineficacia implica la carencia de efectos del negocio jurídico, y en ese sentido no es posible aplicar las normas que sobre prescripción establece el artículo 1740 del Código Civil, por cuanto el paso del tiempo no puede sanear un acto que no produjo consecuencias jurídicas, sobre este aspecto se remite a la lectura de la sentencia SL-1688 de 2019.

Costas

Costas en esta instancia a cargo de **Protección S.A.** de conformidad con lo expuesto en el numeral 4) del artículo 365 del Código General del Proceso. Las agencias se fijan en **\$908.526**. En la primera se revocan las impuestas y en su lugar se condena a **Protección S.A.** al pago a favor de la demandante.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida por la Juez Quince Laboral del Circuito de Medellín, el día **24 de julio de 2020**, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **MARTA LUCIA GÓNZALEZ YEPES** contra **PROTECCIÓN S.A.** y **COLPENSIONES**, para en su lugar:

PRIMERO: DECLARAR la **INEFICACIA** de la afiliación de **MARTHA LUCIA GÓNZALEZ YEPES** a la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**, suscrita el **31 de julio de 1995**, por los motivos expuestos. En consecuencia, **DECLARAR** que para todos los efectos legales la afiliada nunca se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad y por lo mismo siempre permaneció en el régimen de prima media con prestación definida administrado por el **ISS** hoy **COLPENSIONES**.

SEGUNDO: CONDENAR a **PROTECCIÓN S.A.** a trasladar a **COLPENSIONES** los siguientes conceptos recibidos con motivos de la afiliación de la demandante: (i) El capital ahorrado en la cuenta individual de la señora **MARTA LUCIA GÓNZALEZ YEPES**, (ii) los rendimientos generados, (iii) los dineros cobrados por concepto de gastos de administración con cargo a su propio patrimonio y

debidamente indexados a la fecha del traslado, concepto que incluye: los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, y (iv) el aporte correspondiente al fondo de la garantía de pensión mínima.

TERCERO: ORDENAR a COLPENSIONES que una vez recibidos estos recursos proceda a acreditarlos en términos de semanas cotizadas a nombre de la señora **Marta Lucia González Yepes**, quien se entenderá como afiliada al RPM sin solución de continuidad.

CUARTO: Costas en esta instancia a cargo de **PROTECCIÓN S.A.** Las agencias se fijan en **\$908.526**. En la primera se **REVOCAN** las impuestas y en su lugar se condena a **PROTECCIÓN S.A.** al pago a favor de la demandante.

La anterior decisión se notifica por **ESTADOS**.

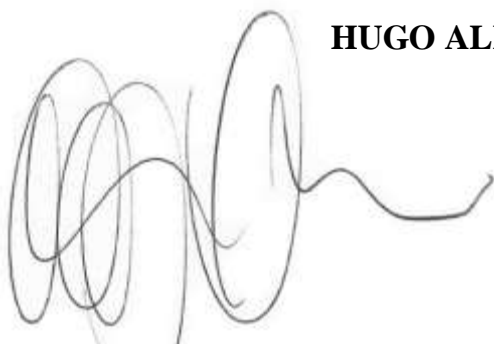
LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTINEZ

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N° 073 del 30 de abril de 2021.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>